



PODER LEGISLATIVO
NAYARIT
XXXII LEGISLATURA

Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.

Dictamen con proyecto de
Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones
de la Ley de Víctimas para el
Estado de Nayarit.

Honorable Asamblea Legislativa:

A los miembros de la Comisión al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la **iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit**, por lo que procedimos al análisis respectivo en atención a la siguiente.

Competencia Legal

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido por los artículos 69, fracción III, y 71, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y los diversos 54 y 55, fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Antecedentes

Con fecha 7 de noviembre del año que transcurre, el diputado Leopoldo Domínguez González, presentó ante el Pleno de la H. Asamblea Legislativa, la iniciativa de mérito, ordenándose su turno al presente órgano colegiado para los efectos correspondientes.

En esa tesitura, y habiéndose turnado la iniciativa de referencia conforme a la competencia que la legislación interna el Congreso establece, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el dictamen respectivo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los diputados integrantes de esta Trigésima Segunda Legislatura, tenemos claro que una de nuestras obligaciones fundamentales consiste en velar desde el ámbito de nuestras atribuciones por el respeto pleno de los derechos humanos de todos los integrantes de la sociedad Nayarita.

Somos conscientes que la protección de los derechos humanos forma parte de los pilares de un Estado democrático, moderno y seguro, pues la promoción y la consolidación de los derechos fundamentales del hombre, reflejan en gran medida, el compromiso asumido para proteger cabalmente a todos los miembros de la colectividad.

En ese sentido, resulta importante realizar acciones que permitan garantizar y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en nuestra entidad, para lo cual es necesario establecer normas que permitan la atención y protección efectiva de quienes han resultado de manera directa o indirecta, dañados por esta clase de actos.

Los Derechos Humanos constituyen el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidas dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

Así pues, cuando existe un agravio a los derechos de las víctimas del delito o de aquellas que hayan recibido alguna violación a sus derechos humanos, el Estado debe restablecer condiciones óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

De tal manera, los diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, hacemos nuestra la presente iniciativa, toda vez que en dicho documento se establecen prerrogativas básicas y esenciales para todas aquellas personas que hayan sido afectadas por la comisión de hechos delictivos o bien, violaciones a los derechos humanos.

Como lo refiere el iniciador en su exposición de motivos, en aras de garantizar a la colectividad el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, es esencial no solo la identificación y protección de las víctimas, sino también su amparo integral a través de medidas de asistencia, atención, prevención, protección y reparación que garanticen su derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad, de forma que se reivindique su dignidad y desarrollen o continúen su proyecto de vida. ¹

La atención a víctimas es considerada como un área en constante evolución debido a las necesidades que surgen día a día y en consecuencia se requiere contar con un marco jurídico sólido, capaz de atender de manera efectiva las necesidades y problemáticas que presentan las víctimas.

En esa tesitura, es importante señalar que nuestra entidad, actualmente cuenta con la **Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, ordenamiento publicado con fecha 23 de agosto del año 2014** en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; legislación encargada de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Ahora bien, con fecha 3 de enero del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, importantes reformas a **la Ley General de Víctimas**, encaminadas fundamentalmente a garantizar una mayor protección a quienes han sido violentados en sus derechos, enmiendas sustanciales que por su trascendencia resultan necesarias incorporarlas a nuestra legislación local.

¹ Consideraciones retomadas del Dictamen con proyecto de Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, aprobado en Comisión el 4 de agosto de 2014.

En razón de lo anterior, la iniciativa en dictamen tiene como finalidad, fortalecer el marco jurídico local, perfeccionando y armonizando la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, al tenor de los postulados que establece la norma General en la materia, todo con el firme propósito de contar con un ordenamiento jurídico capaz de proteger de manera integral a quienes han sufrido detrimento en sus derechos.

De esta manera, para adentrarnos al estudio del documento que nos ocupa consideramos conveniente atender de manera concreta los apartados más importantes que lo conforman, de tal manera tenemos lo siguiente:

- **Se perfeccionan los principios rectores de la norma.**

Sobre este punto en particular habrá que señalar que la iniciativa en dictamen, recoge y hace suyos una serie de principios fundamentales, que garantizan que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en la Ley, serán diseñados, implementados y evaluados buscando siempre el bienestar integral de las víctimas.

Así pues, se establece el interés superior de la niñez, mismo que deberá ser considerado básico en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre niñas, niños y adolescentes. De esta manera, cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

- **De los derechos de ayuda, asistencia y atención.**

Se establece que las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, tendrán la oportunidad de recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en la Ley, habrán de brindarse por dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, a través de los programas,

mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

- **Derecho de acceso eficiente a la justicia.**

Se establece que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

En relación con este trascendental apartado la iniciativa en dictamen dispone que en materia de acceso a la justicia, corresponde al Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

- Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos.
- Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección.
- Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia.
- Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas.
- Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención.
- Medidas de Ayuda Inmediata.

En relación con este rubro la enmienda dispone que la gravedad del daño sufrido por las víctimas habrá de ser el eje que determinará la prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Consolidando los derechos de las víctimas, la reforma plantea que los servicios de ayuda inmediata habrán de tomar en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, poniendo especial énfasis en los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como **niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.**

- **Servicios de Asesoría Jurídica.**

La enmienda propone fortalecer la figura del asesor jurídico de atención a víctimas, considerado como elemento fundamental para garantizar la protección integral de las personas que han sufrido daño o demerito de sus derechos y garantías individuales.

Como lo refiere el iniciador, el asesor jurídico tendrá la obligación de brindar a las víctimas información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que les favorecen, así como de las medidas de asistencia, atención y protección a las que tienen derecho.

De esta manera, el asesor jurídico será el encargado de informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de solución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respecto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad.

La enmienda materia de dictamen dispone que la asesoría se integrará por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en la Ley, de igual manera se indica que contará con un servicio civil de carrera que comprenderá la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitaciones, prestaciones, estímulos y sanciones.

- **Fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.**

Sobre este punto la iniciativa en estudio plantea fortalecer la labor sustantiva de la **Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.**

De esta manera, la Comisión tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Estatal y las demás que esta Ley señale.

De la Comisión dependerá tanto el Fondo, el Registro Estatal de Víctimas y la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas.

Un punto digno de resaltar es que la Comisión contará con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo el cual no deberá tener vínculos partidistas, ni haber estado en el servicio público por algún cargo de elección popular, puesto que vulneraría el principio de autonomía, para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Respecto a este punto, al ser la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio es pertinente establecer que como cuerpo colegiado resaltamos la necesidad de adicionar a las atribuciones de la Junta de Gobierno las propias de la vigilancia y correcta aplicación de los recursos asignados para el debido funcionamiento de la Comisión Estatal, así como lo correspondiente a los planes de trabajo y estados financieros que se presenten a su consideración.

Así también, realizamos la precisión de que los cargos en la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá retribución, emolumento o compensación alguna, esto al advertir que los integrantes son servidores públicos de las Secretarías de Estado, el propio titular de la Comisión Estatal de Atención a

Víctimas, quienes tienen asignados la remuneración propia de su encargo, así como que el cargo de miembro de la Asamblea Consultiva es de carácter honorífico, tal y como se establece en la propuesta que nos ocupa.

Aunado a lo anterior, la Comisión tendrá un comité interdisciplinario evaluador encargado entre otras cuestiones de elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda.

La Comisión estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de la terna que enviará el titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

- **Del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas.**

La reforma en plena armonía con las bases dispuestas en la Ley General de la materia, dispone el establecimiento del **Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas** cuyo objeto consiste en brindar los recursos de ayuda y la reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

El Fondo estatal se integrará con los recursos que destine el Estado expresamente para dicho fin. La suma de las asignaciones anuales que el Estado aporte al Fondo estatal, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Se dispone que el Fondo será administrado por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. La

Comisión deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley y su Reglamento.

- **Régimen Transitorio.**

En relación con este punto, la propuesta plantea que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación; no obstante, se advierte que se conceden noventa días hábiles después de la entrada en vigor para que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se instaure, lo cual se considera pertinente puesto que la propia reforma señala un procedimiento, de inicio, para nombrar al titular de la misma siendo entonces necesario que se conceda el tiempo señalado, además de ser necesario prever y realizar las acciones convenientes para su debido funcionamiento, tales como las señaladas en el artículo cuarto transitorio propuesto en el que se establece la obligación del Gobierno del Estado de hacer las provisiones o modificaciones correspondientes al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho.

Asimismo, resulta viable lo planteado en el sentido de que en tanto el Gobierno del Estado esté en condiciones de contar con la capacidad financiera respecto a las funciones de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, sea la Fiscalía General del Estado la institución quien tenga a su cargo las atribuciones y facultades correspondientes a la Asesoría Jurídica, de esa manera se asegura la protección integral de las personas que han sufrido daño o demérito de sus derechos y garantías individuales.

Por último, los integrantes de esta Comisión Legislativa aportamos a la propuesta la necesidad de establecer un plazo para la integración de la Asamblea Consultiva necesaria para el eficaz funcionamiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit, por lo que siendo que el titular de la misma emite la convocatoria correspondiente para la designación de los integrantes es que se considera un plazo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor

del presente decreto, lo que da un margen de noventa días hábiles más de los otorgados para la integración de dicha Comisión Estatal.

En ese mismo tenor, es conveniente establecer que de conformidad a la reforma aquí en estudio, dos integrantes de la Asamblea Consultiva formarán parte de la Junta de Gobierno; consecuentemente, es necesario hacer la acotación que para la designación de los integrantes de los miembros de la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno por única ocasión se integrará con los miembros los representantes de las Secretarías de Estado y con el titular de la Comisión Estatal; ello, luego de que una vez expedida la convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva, será la propia Junta de Gobierno quienes lleva a cabo los nombramiento.

En razón de los sólidos argumentos antes referidos, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, damos nuestro voto en sentido positivo a la enmienda que nos ocupa, pues estamos convencidos que la adecuación normativa en los términos que se encuentra estructurada y planteada habrá de sentar bases firmes para la protección y salvaguarda integral de los derechos que asisten a las víctimas, señalando que como cuerpo colegiado realizamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la propuesta.

Finalmente, podemos decir que contar con una norma jurídica integral a través de las modificaciones que plantean en el presente proyecto, abonará no solo a la atención y protección de las víctimas sino también habrá de contribuir de manera notable a la necesaria reparación del tejido social, al permitir que las personas recuperen la confianza, en la Ley, así como en las instituciones del Estado.

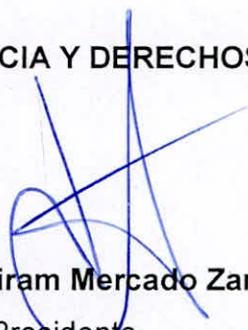
Fundamento jurídico del Dictamen

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Nayarit, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor del documento que se adjunta.

D A D O en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



Dip. Javier Hiram Mercado Zamora

Presidente

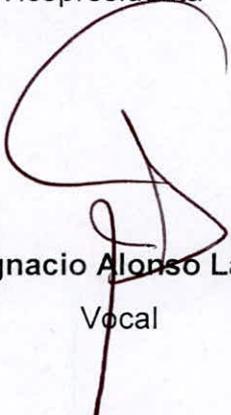
Dip. Margarita Morán Flores

Vicepresidenta



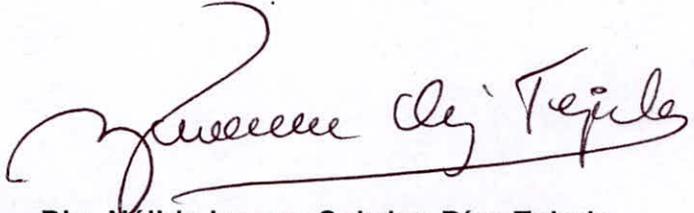
Dip. Pedro Roberto Pérez Gómez

Secretario



Dip. Ignacio Alonso Langarica Ávalos

Vocal



Dip. Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda

Vocal

Hoja de firmas correspondientes al Dictamen con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit.

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se reforman los artículos 1; 4 fracciones XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XXVIII, XXIX; 5; 6 fracciones XXIV, XXXIV, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII; 7 párrafos primero, segundo, tercero y cuarto; 9; 11 fracción IV; 20 párrafos quinto, sexto y séptimo; 28 segundo párrafo; 30 segundo párrafo; 31; 36; la denominación del Capítulo II dentro del Título Tercero; 40; 42 párrafo primero y segundo; 44 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 46; 48; 52; 66 fracciones I y VI; 72 primer párrafo; 73 primer párrafo; 75; 76; 88; 89 fracciones I, XVI y XVII; 90 párrafos primero, segundo, tercer, cuarto y quinto; 91 párrafo primero y segundo; 92 fracciones XXX y XXXI; 96 primer párrafo; la denominación del Capítulo IV contenido dentro del Título Sexto; 102 primer párrafo; 103; 104; 105 párrafos primero y segundo; 106; 107. **Se adicionan** los artículos 6 fracción XLIII y XLIV; 7 párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo; 8 tercer párrafo; 9 Bis; 11 párrafo segundo y tercero; 14 párrafo segundo y tercero; 20 párrafo octavo y noveno; 26 tercer párrafo; 28 tercer párrafo; 32 segundo párrafo; 37 Bis; 42 párrafo tercero y cuarto; 44 fracciones VIII, IX y X; 69 quinto y sexto párrafo; 73 segundo párrafo; 89 fracciones XVIII y XIX; 90 párrafo sexto y séptimo; 90 Bis; 90 Ter; 90 Quáter; 90 Quinquies; 90 Sexies; 91 párrafo tercer, cuarto y quinto; 92 fracción XXXII; 92 Bis; 92 Ter; 94 segundo y tercer párrafo; 102 segundo párrafo; 105 párrafo tercero; 106 Bis. **Se derogan** los artículos 15; 27 fracción III y segundo párrafo; 108 fracción III, todos de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley se establece con carácter de orden público interés social y observancia en todo el territorio del Estado de Nayarit, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo tercero, 17, 20 y 73 fracción XXIX- X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, las disposiciones aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y otras leyes en materia de víctimas.

Artículo 4.- ...

I. a XI. ...

XII. **Fondo:** Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral a Víctimas;

XIII. a XVI. ...

XVII. **Procedimiento:** Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

XVIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas;

XIX. Proyecto de vida: La expectativa razonable y accesible de realización y desarrollo personal, familiar y profesional;

XX. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo;

XXI. Registro: Registro Estatal de Víctimas;

XXII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit;

XXIII. Reparación Integral: Medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica;

XXIV. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

XXV. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Atención a Víctimas;

XXVI. UMA: La Unidad de Medida y Actualización considerando su valor en términos de la ley reglamentaria del artículo 26, Apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXVII. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;

XXVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y

XXIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, local o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

Artículo 5.- Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

I. **Buena fe.-** Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

II. **Complementariedad.-** Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

III. **Debida diligencia.-** El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

IV. **Dignidad.-** La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y local, así como los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

V. **Enfoque diferencial y especializado.-** Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los

grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

VI. **Enfoque transformador.**- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

VII. **Gratuidad.**- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

VIII. **Igualdad y no discriminación.**- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

IX. **Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.**- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

X. **Interés superior de la niñez.**- El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

XI. **Máxima protección.**- Toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

XII. **Mínimo existencial.**- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

XIII. **No criminalización.**- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

XIV. **Participación conjunta.**- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas.

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

XV. **Progresividad y no regresividad.**- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

XVI. **Publicidad.**- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

XVII. **Rendición de cuentas.**- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de

evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas.

XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

XX. Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

Artículo 6.- ...

I. a XXIII. ...

XXIV. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;

XXV. a XXXIII. ...

XXXIV. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional de los recursos de ayuda;

XXXV. a XXXVII. ...

XXXVIII. Toda comparecencia ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera la presencia de la Víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo;

XXXIX. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los fondos de ayuda federal y estatal en términos de esta Ley;

XL. A tener acceso a los registros durante todo el procedimiento y a obtener copia de los mismos, para informarse sobre el estado y avance del mismo, por lo que hace a las actuaciones relacionadas con su interés jurídico, salvo la información que ponga en riesgo la investigación o la identidad de las personas protegidas;

XLI. A presentar acción penal particular conforme a las formalidades previstas en la Ley adjetiva de la materia;

XLII. A solicitar la reapertura del procedimiento cuando se haya decretado su suspensión;

XLIII. A no ser presentados ante los medios de comunicación o ser objeto de información sin su consentimiento, y

XLIV. Los demás señalados por la Constitución federal y local, así como los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.

Artículo 7.- Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley.

Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en esta Ley, se brindarán por dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

Las víctimas podrán requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquella o aquellas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

La Comisión deberá otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo.

La Comisión, en el ámbito de su competencia, deberá otorgar, con cargo al Fondo, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante. La

Comisión requerirá a la víctima en un plazo de treinta días, los comprobantes del gasto que se haya generado con motivo del otorgamiento de dichas medidas.

En caso de no contar con disponibilidad de recursos para cubrir las medidas de ayuda inmediata la Comisión podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas del Gobierno Federal que las cubra con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La Comisión se compromete a restituir los recursos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.

Artículo 8.- ...

...

El Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, debe cubrir las erogaciones derivadas de las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que brinden la Comisión a través de sus respectivos Recursos de Ayuda.

Artículo 9.- En materia de acceso a la justicia, corresponde al Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

- I. Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;
- II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección;
- III. Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de emergencia;
- IV. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;
- V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;
- VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;
- VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;
- VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y
- IX. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, y las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 9 Bis.- Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la

debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación.

Artículo 11.- ...

I. a III. ...

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal;

V. a XIII. ...

La Comisión, podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere la fracción XIII del presente artículo, con cargo al Fondo y dependiendo de la suficiencia presupuestaria del mismo.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 14.- ...

La Comisión, podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo y dependiendo de la suficiencia presupuestaria del mismo

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Artículo 15.- Derogado.

Artículo 20.- ...

...

...

...

La Comisión, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo y dependiendo de la suficiencia presupuestaria del mismo.

Sólo se podrán contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia.

Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

Artículo 26.- ...

I. a VI. ...

...

Las medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo.

Artículo 27.- ...

I. a II. ...

III. Derogado

IV. a VIII...

Derogado.

Artículo 28.- ...

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

Artículo 30.- ...

I. a X. ...

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, la Federación, las entidades federativas o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

Artículo 31.- El Estado o municipio donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda.

Artículo 32.- ...

I. a XII. ...

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

Artículo 36.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán

servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

CAPÍTULO II

MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO, TRASLADO Y PROTECCIÓN

Artículo 37 Bis.- Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

- I. Formular denuncia o querrela a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;
- II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;
- III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y
- IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del artículo 7 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

Artículo 40.- Las autoridades estatales y municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica, en los términos del título correspondiente.

Artículo 42.- Los servicios de asesoría jurídica y representación legal, se otorgarán a las víctimas, a través de la Asesoría Jurídica, institución dependiente de la Comisión.

Los requisitos que deberán de satisfacerse para constituirse en asesores o representantes legales de las víctimas, los establecerá el reglamento interior de la Comisión.

La Asesoría Jurídica se integrará por los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta Ley.

La Asesoría Jurídica para el cumplimiento de los objetos de la presente Ley contará con un servicio civil de carrera que comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones, en términos del Reglamento.

Artículo 44.-...

I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito estatal y nacional;

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa, cuyos procedimientos se encuentren vinculados a la comisión de un delito de competencia local;

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes;

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;

VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables;

VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico considere que

no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y

X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

Artículo 46.- Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión, las secretarías, dependencias, organismos y entidades del orden estatal del sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Artículo 48.- Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 52.- La víctima o sus familiares podrán acceder a becas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior, conforme a lo dispuesto por la legislación competente.

Artículo 66.- ...

...

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;

II. a V. ...

VI. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;

VII. a VIII. ...

...

Artículo 69.- ...

...

I. a VIII. ...

...

...

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión, expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

Artículo 72.- La Comisión determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

a. ...

b. ...

...

...

Artículo 73.- El Estado compensará a través de las Comisión en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

La Comisión para asegurar su cumplimiento podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal que cubra la compensación subsidiaria, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.

Artículo 75.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas se cubrirá con cargo al Fondo en términos de esta Ley y su Reglamento.

Artículo 76.- El Estado a través de la Comisión tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

Artículo 88.- El Presidente del Sistema Estatal podrá invitar como miembros honorarios, a miembros de las instituciones u organizaciones privadas o sociales,

los colectivos o grupos de víctimas, personalidades que por su destacada trayectoria y experiencia puedan contribuir al logro de los propósitos de los Sistemas; estos invitados sólo tendrán derecho a voz. El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente.

Artículo 89.- ...

I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas, estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

II. a XV. ...

XVI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;

XVII. Promover en el ámbito de su competencia la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados por la Comisión Ejecutiva a través del Fondo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General;

XVIII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento, y

XIX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 90.- El Sistema Estatal contará con una Comisión, la cual será la instancia de colaboración y coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva Federal.

La Comisión es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio; con autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el Presupuesto de Egresos del Estado.

Las medidas y reparaciones que dicte la Comisión, serán determinadas por el Comisionado Ejecutivo en los términos de la fracción XIII del artículo 92 Bis de esta Ley.

La Comisión tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia; así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Estatal y las demás que esta Ley señale.

El domicilio de la Comisión es en la ciudad de Tepic, Nayarit y podrá establecer oficinas en otros municipios del Estado, cuando así lo autorice la Junta de Gobierno, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Estatal con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.

De la Comisión depende el Fondo y el Registro.

A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno del Estado contará con un Fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 90 Bis.- El patrimonio de la Comisión se integra:

- I. Con los recursos que le asigne la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos del Estado;
- II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
- III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

Artículo 90 Ter.- La Comisión cuenta con una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo para su administración, así como con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

Artículo 90 Quáter.- La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, estará integrada de la siguiente manera:

- I. Un representante de las siguientes Secretarías de Estado:
 - a) De Gobierno, quien la presidirá;
 - b) De Administración y Finanzas;
 - c) De Educación;
 - d) De Salud;
- II. dos representantes de la Asamblea Consultiva, designados por ésta, y
- III. El titular de la Comisión, quien será el Secretario Técnico.

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, serán las personas titulares de cada Institución y sus suplentes tendrán el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente. En sus decisiones los integrantes tendrán derecho a voz y voto.

Los cargos en la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá retribución, emolumento o compensación alguna.

La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico.

La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces al año y las extraordinarias que propondrá su Presidente, el Comisionado Ejecutivo o al menos 3 de sus integrantes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siempre que esté presente el Presidente de la Junta de Gobierno. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.

Artículo 90 Quinquies.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Aprobar y modificar su reglamento de sesiones y el Reglamento Interior de la Comisión con base en la propuesta que presente el Comisionado Ejecutivo;
- II. Aprobar las disposiciones normativas que el Comisionado Ejecutivo someta a su consideración en términos de la Ley y el Reglamento;
- III. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión que proponga el Comisionado Ejecutivo, así como evaluar su debido cumplimiento;
- IV. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión de acuerdo con esta Ley;
- V. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Comisión;
- VI. Examinar y discutir los planes de trabajo que se propongan, así como los informes de actividades presupuestales y estados financieros que se presenten a su consideración, y
- VII. Aquellas que por su naturaleza jurídica le correspondan.

En ningún caso la Junta de Gobierno tendrá competencia para conocer de los recursos de ayuda y la reparación integral que la Comisión otorgue a las víctimas.

Artículo 90 Sexies.- La Asamblea Consultiva es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión.

La Asamblea Consultiva estará integrada por cinco representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Comisión emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

La convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva atenderá a un criterio de representación regional rotativa de cuando menos una institución, organización, colectivo o grupo por región.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el Comisionado Ejecutivo y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros de la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones de la Asamblea Consultiva estarán previstas en el Reglamento de esta Ley, las personas integrantes durarán en su cargo cuatro años, y podrán ser ratificadas sólo por un período igual, en los términos de lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Artículo 91.- La Comisión estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el titular del Poder Ejecutivo del Estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Para ser comisionado Ejecutivo se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano y tener veintiún años cumplidos;
- II. Tener su residencia en la Entidad y no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso;
- III. Haberse desempeñado de manera destacada en actividades profesionales, de servicio público, en organizaciones de la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;
- IV. Contar con título profesional, y
- V. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los tres años previos a su designación.

En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Comisionado Ejecutivo para el desarrollo de las actividades de la Comisión podrá designar a las personas responsables del Fondo y el Registro.

Artículo 92.- ...

I. a XXIX. ...

XXX. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

XXXI. Hacer públicos los informes anuales sobre el funcionamiento del Fondo, así como sobre el Programa y las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia, y

XXXII. Las demás que se deriven de la normatividad jurídica aplicable.

Artículo 92 Bis.- El Comisionado Ejecutivo, tendrá las siguientes facultades:

- I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión;
- II. Convocar y dar seguimiento a las sesiones que realice la Junta de Gobierno;
- III. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión;
- IV. Notificar a los integrantes de los Sistemas los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos;
- V. Coordinar las funciones del Registro, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro;
- VI. Rendir cuentas al Congreso del Estado cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión, al Registro y al Fondo;
- VII. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión;
- VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión a solicitar su inscripción en el Registro, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz de las funciones de las instituciones;
- IX. Suscribir los convenios de colaboración, coordinación o concertación o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
- X.- Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la Comisión, mismos que deberán ser consultados por la Junta de Gobierno;
- XI. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada;
- XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión;

XIII. Determinar a propuesta del Comité Interdisciplinario Evaluador, los Recursos de Ayuda y la reparación integral que la Comisión otorgue a las víctimas, para lo cual podrá apoyarse en la asesoría de la Asamblea Consultiva, y

XIV. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión en términos de la legislación aplicable.

Artículo 92 Ter.- La Comisión contará con un comité interdisciplinario evaluador con las siguientes facultades:

I. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;

II. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;

III. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y

IV. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

Artículo 94.- ...

El Registro Estatal es una unidad administrativa de la Comisión encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel local, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden local.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro.

Artículo 96.- Para el reconocimiento de la calidad de víctima y la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá atender a lo que dispone sobre el particular la Ley General de Víctimas.

...

CAPÍTULO IV

DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

Artículo 102.- El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

Artículo 103.- El Fondo estatal se conformará con los recursos que destine el Estado expresamente para dicho fin.

La suma de las asignaciones anuales que el Estado aporte al Fondo, será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

La forma de realizar la aportación, los plazos y demás cuestiones relativas a la integración del Fondo, deberán hacerse atendiendo a lo dispuesto por la Ley General.

De los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, en términos de la presente Ley.

Artículo 104.- La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas y los de esta Ley, se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley.

Artículo 105.- El Fondo será administrado por una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo a las instrucciones de la Comisión en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

La Comisión proveerá a las víctimas que corresponda los recursos para cubrir las medidas de ayuda, asistencia, auxilio, reparación integral y demás medidas señaladas en la presente Ley. La víctima deberá comprobar el ejercicio del monto a más tardar a los treinta días posteriores de haber recibido el recurso. El Reglamento establecerá los criterios de comprobación, dentro de los cuales deberá señalar aquellos en los que los organismos públicos de protección de derechos humanos podrán auxiliar en la certificación del gasto.

La Comisión deberá emitir las reglas de operación para el funcionamiento del Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.

Artículo 106.- Los recursos del Fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público.

El Comisionado Ejecutivo, con el apoyo del servidor público designado por éste para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo, deberá:

- I. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;
- II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas, a la Junta de Gobierno, y

IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.

Artículo 106 Bis.- Los recursos del Fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los apoyos a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y conforme al Reglamento respectivo.

La Comisión determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del Fondo incluida la compensación, previa opinión que al respecto emita el Comité interdisciplinario evaluador.

El Fondo será fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.

El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.

Artículo 107.- Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá estar inscrita en el Registro y presentar su solicitud ante la Comisión de acuerdo a los términos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

Las determinaciones de la Comisión respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo

El expediente deberá contener como mínimo:

I. Los documentos presentados por la víctima;

II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;

III. Identificación de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos generada por éste, y

IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos en consecuencia de éste.

En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:

I. Estudio de trabajo social elaborado por los servicios de asesoría interdisciplinaria en el que se haga una relación de las condiciones de

victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;

II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;

III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y

IV. Propuesta de resolución a la Comisión Estatal donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.

Artículo 108.- ...

I. a II...

III.- Derogado.

IV. a VI. ...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo.- La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas deberá instaurarse dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero.- En tanto el Gobierno del Estado esté en posibilidad de contar con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y a la Asesoría Jurídica Estatal, las atribuciones, facultades y atribuciones de estas habrán de recaer en la Fiscalía General del Estado.

Cuarto.- El Gobierno Estatal deberá hacer las provisiones o modificaciones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y establecer una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018.

Quinto.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las reformas al Reglamento de la presente Ley a los ciento ochenta días hábiles siguientes, a la entrada en vigor del presente Decreto.

Sexto.- La Asamblea Consultiva deberá estar integrada dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Séptimo.- Para la designación de los integrantes de los miembros de la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno por única ocasión se integrará con los miembros señalados en las fracciones I y III del artículo 90 Quáter.